



Informe sobre Política Regulatoria

Utilizar y adaptar las herramientas de la política regulatoria para una transición justa y ecológica

Aspectos destacados

- El uso de instrumentos y mecanismos de mejora regulatoria pueden contribuir a promover la calidad normativa para la transición verde. Históricamente orientada hacia costes económicos y cargas administrativas, la noción de que pueden y deben utilizarse instrumentos de mejora regulatoria para alcanzar objetivos medioambientales está cada vez más consolidada, aunque se aplica menos sistemáticamente en la práctica. Los instrumentos de regulación pueden permitir a los gobiernos integrar las consideraciones medioambientales en todas las fases del ciclo de regulación.
- Una reglamentación adecuada, que incluya la concesión de licencias y permisos, la aplicación de la normativa y las inspecciones, es esencial para gestionar los riesgos ambientales con eficacia y eficiencia y para colmar la brecha de cumplimiento de la normativa ambiental.
- La aplicación y el cumplimiento de las leyes y normativas medioambientales están muy por debajo de lo necesario para hacer frente a los retos medioambientales. Dadas las presiones medioambientales y las limitaciones financieras de los reguladores, es necesario que la aplicación de la normativa evolucione hacia un sistema centrado en el riesgo. Esto permitirá a los reguladores mejorar las condiciones para alcanzar sus objetivos de política medioambiental (eficacia) e impulsar un mejor cumplimiento con menos recursos (eficiencia).
- La transición ecológica es un esfuerzo mundial. La totalidad de las prioridades políticas que persigue la transición verde no pueden ser atendidas por un solo país. Cuestiones como la contaminación atmosférica, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la acidificación de los océanos o los residuos plásticos son problemas comunes globales, que plantean grandes amenazas para el planeta y exigen una actuación internacional urgente. Para hacer frente a estos problemas, una acción reguladora eficaz y eficiente tendrá que ser coherente y, en ocasiones, conjunta entre países. Las normativas diseñadas de forma aislada corren el riesgo de ser, en el mejor de los casos, ineficaces y, en el peor, contraproducentes.

¿Cuál es el problema?

El cambio climático y otras amenazas medioambientales exigen una actuación gubernamental urgente en favor de las personas y el planeta. La acción gubernamental en forma de regulación es crucial para alcanzar los objetivos medioambientales al tiempo que se ofrecen oportunidades económicas. Es una de las herramientas clave que disponen los gobiernos para alcanzar los objetivos medioambientales. Debido a la urgencia de las amenazas medioambientales, es de máxima prioridad adoptar medidas que garanticen que la normativa sigue siendo adecuada a su finalidad, fomente la inversión en innovación y siga apoyando los objetivos medioambientales. En este sentido, será especialmente importante encontrar un equilibrio entre objetivos (medioambientales y económicos) contrapuestos.

Normalmente, las preocupaciones económicas pueden primar sobre las consideraciones sociales o medioambientales en el diseño normativo y no se evalúan sistemáticamente las consecuencias de las distintas opciones políticas. Los gobiernos deberían considerar la posibilidad de situar el medio ambiente en el centro de sus políticas reguladoras, reequilibrando las consideraciones medioambientales frente a las económicas. En última instancia, el éxito de la acción medioambiental exigirá un cambio de paradigma en la política reguladora.

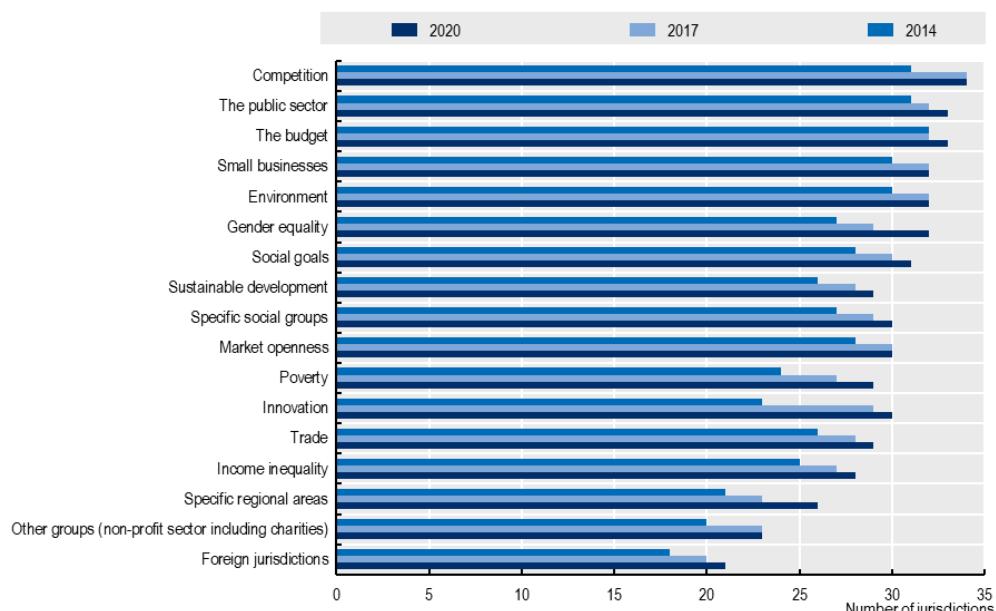
Gracias a las buenas prácticas reguladoras, los enfoques ágiles y basados en el riesgo, la aplicación de la normativa, la cooperación reguladora internacional, los reguladores económicos y los conocimientos sobre el comportamiento a la hora de diseñar, aplicar y evaluar una normativa eficiente y eficaz para el medio ambiente, los gobiernos pueden hacer frente a los retos de aplicar coherentemente una política más ecológica sin dejar de lado los objetivos económicos.



Informe sobre Política Regulatoria

Uno de los pasos más importantes en la promoción de un enfoque verde es el diseño normativo, en el que la evaluación sistemática del impacto ambiental a la hora de elaborar la normativa es esencial para garantizar la coherencia de las políticas en favor del medio ambiente. Sin embargo, la evaluación del impacto ambiental plantea varios retos a los gobiernos, ya que las normativas con impacto ambiental afectan a una serie de cuestiones que son complejas de calcular y medir. De hecho, los datos de los Indicadores de Política y Gobernanza en materia de Reglamentación (iREG) de la OCDE muestran que, si bien los países exigen cada vez más formalmente a los responsables políticos que tengan en cuenta las repercusiones medioambientales de las normativas, hay margen para seguir integrando esta práctica en el proceso de elaboración de normas.

Figura 1: Más países de la OCDE exigen una evaluación del impacto de la normativa en el medio ambiente



Nota: Los datos se basan en 34 países miembros de la OCDE y la Unión Europea.

Fuente: Indicators of Regulatory Policy and Governance (iREG) Surveys 2014, 2017 y 2021. En OCDE (2021), OECD Regulatory Policy Outlook 2021, OECD Publishing, París, <https://doi.org/10.1787/38b0fdb1-en>.

Otro ejemplo es el uso de la participación de las partes interesadas en la elaboración de políticas verdes. El compromiso de las partes interesadas es clave para una transición justa. Los ciudadanos tienen un claro interés en las cuestiones de política medioambiental, tanto por sus propios intereses como por el bien del medio ambiente. Los gobiernos no se involucran suficientemente con un amplio abanico de partes interesadas en todas las fases del ciclo normativo. El éxito a la hora de hacer frente a las presiones medioambientales requerirá la acción colectiva de diversas partes interesadas.

Otro problema es que los gobiernos tienden a "regular y olvidar". Esto significa que los gobiernos adoptan normativas y las hacen cumplir sin revisar periódicamente sus repercusiones reales. Esto puede acarrear consecuencias negativas para el medio ambiente que pueden pasar desapercibidas y las normativas podrían no abordar problemas medioambientales que avanzan con rapidez. El ritmo del cambio climático y de los avances tecnológicos exigirá que los gobiernos pongan en marcha ciclos de evaluación de la normativa más iterativos y flexibles para evaluar continuamente la normativa vigente con un planteamiento que abarque todo el sistema.

Por último, una cuestión relevante es que la acción reguladora nacional e internacional están en gran medida desconectadas, a pesar de que el cambio climático es un reto global. La cooperación reguladora internacional es esencial para abordar cuestiones medioambientales transfronterizas como la contaminación atmosférica y la biodiversidad. Con este fin, los gobiernos deberían tener en cuenta las pruebas, los impactos y los instrumentos internacionales relacionados con las cuestiones

Informe sobre Política Regulatoria



Ejemplos de países de la OCDE

Utilización de la consulta pública para promover objetivos medioambientales en Canadá

Una propuesta de reglamentación en Canadá sobre la emisión de metano y compuestos incluía la gestión de cinco fuentes de emisión mediante reglamentación, límites de emisión específicos para las fuentes de emisión significativas y la previsión de medidas de cumplimiento que podrían reducir las emisiones de metano de cada fuente. En respuesta a la consulta pública, los departamentos promotores (medio ambiente y sanidad) modificaron las fechas de entrada en vigor de la normativa propuesta y redujeron las inspecciones de fugas a tres veces al año para tener en cuenta las dificultades operativas de las empresas en invierno. El límite de emisiones de los compresores alternativos se aumentó para reducir los costes de cumplimiento. Como resultado, la propuesta de normativa promueve los objetivos medioambientales al tiempo que facilita a las empresas el cumplimiento de la normativa.

La Convención Ciudadana sobre el Clima en Francia

La Convención Ciudadana sobre el Clima fue un proceso deliberativo que reunió a 150 ciudadanos representativos de la población francesa, seleccionados por sorteo cívico, durante siete fines de semana a lo largo de seis meses. Su objetivo era dar a los ciudadanos la oportunidad de proponer recomendaciones políticas informadas para hacer frente al cambio climático: definir una serie de medidas que permitan a Francia reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 40% de aquí a 2030 (en comparación con los niveles de 1990) de una manera socialmente justa y equitativa. Tras amplias deliberaciones, los ciudadanos elaboraron una lista de 149 medidas para el Gobierno francés, que abarcan aspectos que van desde el consumo y el transporte hasta la producción y los métodos de trabajo. Entre las sugerencias elaboradas por la Convención figuran propuestas para endurecer y hacer cumplir la normativa sobre gestión de residuos y emprender acciones en materia de reglamentación internacional para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero de los buques.

Acciones sugeridas de políticas públicas

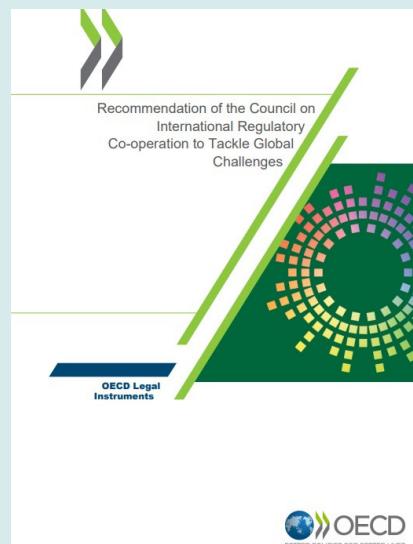
- Para hacer frente a los retos relacionados con el clima y el medio ambiente es necesario reforzar la gobernanza reguladora y garantizar que los instrumentos, procesos e instituciones pertinentes sean adecuados para promover un enfoque ágil y basado en el riesgo a la hora de regular.
- En la práctica, los impactos ambientales deben evaluarse de forma sistemática y granular. Además, las prácticas de evaluación del impacto ambiental son desiguales en los distintos ministerios. Los ministerios que no tienen como principal responsabilidad las cuestiones de política medioambiental tienen menos experiencia en la evaluación de los impactos medioambientales y lo hacen de forma menos sistemática.
- Herramientas como la evaluación del impacto normativo, la evaluación a posteriori y la participación de las partes interesadas permiten a los gobiernos diseñar normativas basadas en los datos más recientes, informadas por los distintos grupos de la sociedad y adecuadas para promover la transición ecológica. Los enfoques ágiles y basados en el riesgo garantizan que las normativas sean proporcionadas y fomenten la innovación tecnológica. Las herramientas de regulación permiten a los gobiernos aplicar las políticas de forma eficaz.
- Los reguladores económicos desempeñan varias funciones y actividades que podrían aprovecharse para contribuir a los objetivos medioambientales. Los reguladores pueden desarrollar normativas basadas en los resultados, en las que definen objetivos, en lugar de dictar procedimientos sobre cómo los operadores deben alcanzar metas específicas podrían ayudar a alcanzar los objetivos de las políticas públicas y aprovechar la innovación.



Informe sobre Política Regulatoria

- La cooperación internacional en materia de reglamentación permite a los países intercambiar experiencias, aprender unos de otros y garantizar enfoques coherentes para abordar los retos medioambientales. Los países pueden integrar una perspectiva internacional en el proceso regulador teniendo en cuenta las repercusiones transfronterizas sobre el medio ambiente o colaborando sistemáticamente con las partes interesadas extranjeras.
- Los conocimientos sobre el comportamiento pueden ayudar a los responsables políticos a entender cómo eligen los individuos y las empresas para apoyar procesos y decisiones políticas más eficientes.

Lecturas recomendadas



Escanear para leer
el reporte



Escanear para leer
el reporte